

Este documento hace parte de la colección de 11 fichas territoriales que presentan una lectura integrada y comparada del estado de implementación del Acuerdo Final de Paz en distintos departamentos y subregiones del país, así como una ampliación de la sesión de Capítulos Regionales presentado por la Unidad de Implementación en el marco de la conmemoración del 9no Aniversario de la Firma del Acuerdo de Paz.

En estos documentos se narra y hace seguimiento a los principales componentes, instrumentos y arreglos institucionales de la implementación. El análisis incorpora información primaria aportada por las entidades del orden nacional (en su nivel central) y datos abiertos provenientes de plataformas oficiales del Estado.

Fue construido durante el segundo semestre de 2025 y la información puede estar sujeta a los procesos normales de validación institucional. El corte máximo de reporte corresponde al 30 de septiembre de 2025, mientras que el periodo específico de análisis puede variar según cada apartado y subpunto, lo cual se precisa según corresponde.

Este ejercicio busca responder a la necesidad de desagregar territorialmente los datos de la implementación del Acuerdo, visibilizando dinámicas, avances y brechas que no se capturan en lecturas agregadas, y se orienta a ser un insumo útil tanto para la toma de decisiones de las entidades públicas como para la incidencia y el control social de la sociedad civil, mediante evidencia organizada sobre Reforma Rural Integral, participación política, reincorporación, garantías de seguridad, víctimas y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, así como sobre los factores situacionales que condicionan la construcción de paz en los territorios.

Entidades Aportantes de Información por Apartado

Eje / Punto del Acuerdo	Entidades que aportaron información
Punto 1. Reforma Rural Integral	ANT - IGAC - - ADR - ART - URT - APC
Punto 2. Participación política	MinTIC · OACP · CNE
Punto 3. Reincorporación	ARN
Punto 4. Garantías de seguridad	AICMA - DSCI – MIN DEFENSA
Punto 5. Víctimas y SIVJNR	UBPD - JEP - UARIV - ODH-DIH



Ficha Territorial Antioquía de Implementación del Acuerdo Final de Paz

Presidencia de la República

Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz

Corte: 30 de septiembre de 2025

Tabla de contenido

<i>Identificación General del Territorio</i>	4
PRESENTACIÓN TERRITORIO	4
Contexto de seguridad	7
ALERTAS TEMPRANAS	8
ÍNDICE DE RIESGO DE VICTIMIZACIÓN	8
CONFLICTOS SOCIALES Y ÉTNICOS	8
ÍNDICE GINI	9
SENTENCIAS, ÓRDENES JUDICIALES Y/O MACRO CASOS	9
MESA DE ARTICULACIÓN	10
<i>Reforma Rural Integral: ¿COMO VA LA REFORMA RURAL INTEGRAL?</i>	11
Entregas, Formalización y Restitución de Tierras	12
INVERSIONES PATR	13
<i>COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL AFP</i>	16
DESARROLLO RURAL DESDE LA ADR	17
CATASTRO MULTIPROPÓSITO	18
<i>Participación Política ¿LAS COMUNIDADES ESTÁN PARTICIPANDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ?</i>	18
CONSEJOS TERRITORIALES DE PAZ	18
VEEDURÍAS EN ASUNTOS DE PAZ	18

EMISORAS DE PAZ	19
ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN	19
<i>Reincorporación: ¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO PARA QUE LAS PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN TRANSFORMEN SU VIDA?</i>	20
PROYECTOS PRODUCTIVOS	20
<i>Soluciones al Problema de las Drogas Ilícitas ¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO PARA ATENDER EL PROBLEMA DE LAS DROGAS Y LOS CULTIVOS DE USO ILÍCITO</i>	21
PNIS-RENHACEMOS.....	21
EL DESMINADO HUMANITARIO.....	22
LUCHA CONTRA LAS DROGAS	22
<i>Víctimas y Reparación Integral: ¿SE LES ESTÁ CUMPLIENDO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO?</i>	24
Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) y Planes de Retorno y Reubicación (PRYR).....	24
RECLUTAMIENTO FORZADO	26
TRABAJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES CON CONTENIDO REPARADOR (TOAR)	26
BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS	26
REFLEXIONES FINALES.....	27
Glosario de Siglas y Términos	29

Identificación General del Territorio

DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

PRESENTACIÓN TERRITORIO

El departamento de Antioquia, ubicado en la región noroccidental de Colombia, está conformado por 125 municipios que reflejan una marcada diversidad cultural, geográfica y socioeconómica, convirtiéndolo en uno de los territorios más complejos y estratégicos del país. Dentro de este conjunto se encuentran 21 municipios priorizados como PDET, distribuidos en tres subregiones: Bajo Cauca, Nordeste y Urabá. En el Bajo Cauca y Nordeste se incluyen Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia y Zaragoza; mientras que en la subregión de Urabá se encuentran Apartadó, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá y Turbo. Estas subregiones concentran históricas afectaciones del conflicto armado, profundas brechas de desarrollo y dinámicas persistentes de economías ilícitas, lo que ha motivado su priorización en el marco del Acuerdo Final de Paz.

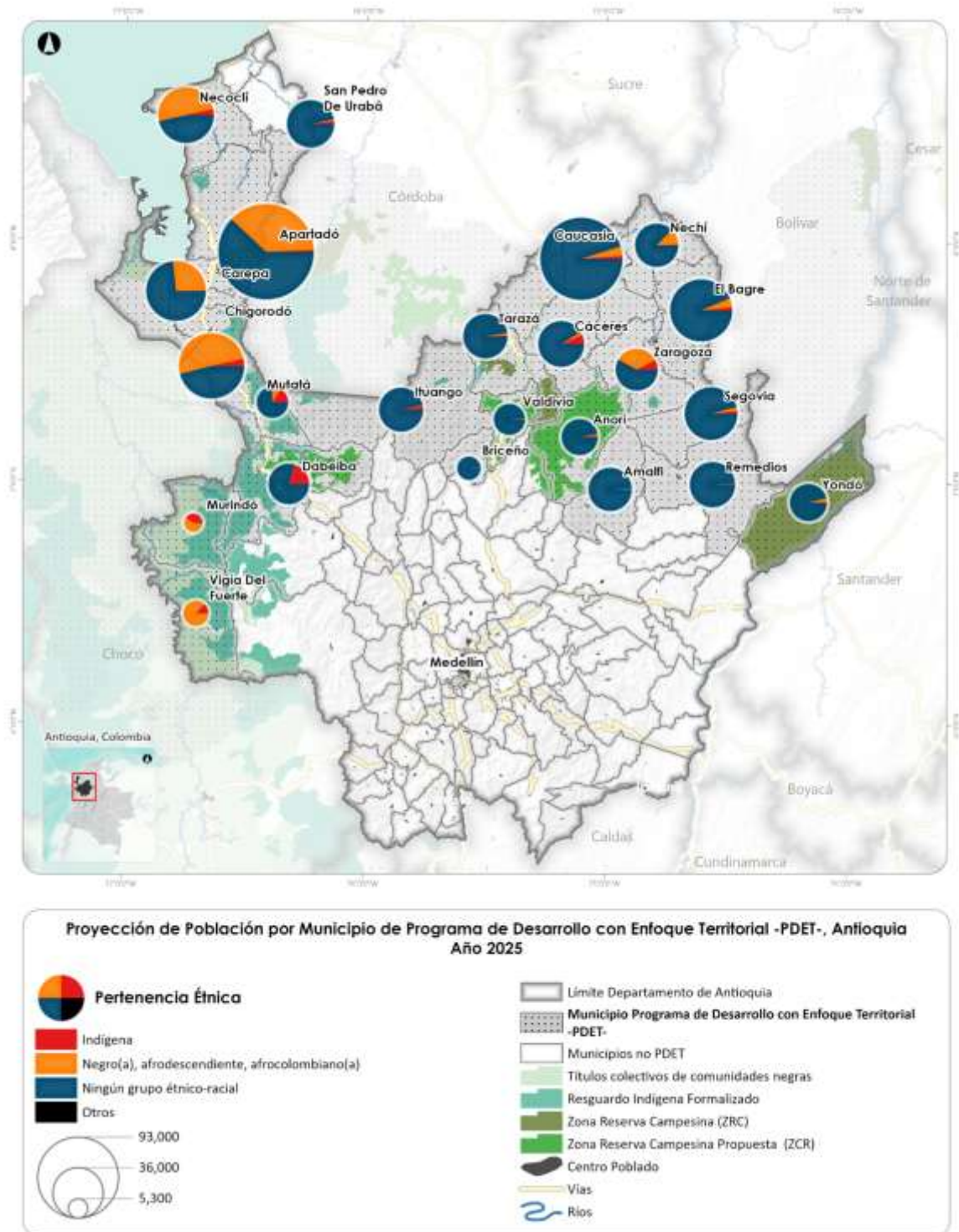
El Bajo Cauca y el Nordeste albergan recursos naturales estratégicos, especialmente yacimientos de oro y otros minerales, así como amplias zonas forestales de importancia ambiental. Sin embargo, estas potencialidades han coexistido con escenarios de conflictividad socioambiental asociada a la minería ilegal, la explotación de cultivos de uso ilícito y la presencia de actores armados ilegales que disputan el control territorial y las rentas asociadas a estas economías. Estas tensiones han derivado en ciclos recurrentes de violencia, desplazamiento, confinamiento y afectaciones a las formas de vida de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas.

Por su parte, la subregión de Urabá, caracterizada por su ubicación geoestratégica como puerta de conexión entre el centro del país, el Caribe y el Darién, ha sido históricamente un corredor para el tráfico de economías ilícitas, el contrabando, el tránsito de migrantes y la articulación de redes criminales transnacionales. Municipios como Turbo, Apartadó y Necoclí han experimentado tensiones derivadas de disputas entre grupos armados ilegales por el control de estos corredores y de las actividades productivas, legales e ilegales, presentes en la región.

A estas dinámicas se suman retos estructurales de conectividad e infraestructura, especialmente en las zonas rurales dispersas de Antioquia, que dificultan el acceso a servicios básicos, mercados, educación, salud y justicia. Estas limitaciones profundizan la exclusión social y agravan las condiciones de pobreza multidimensional, reduciendo la capacidad de las comunidades para afrontar los impactos del conflicto y limitar la presencia de economías ilegales.

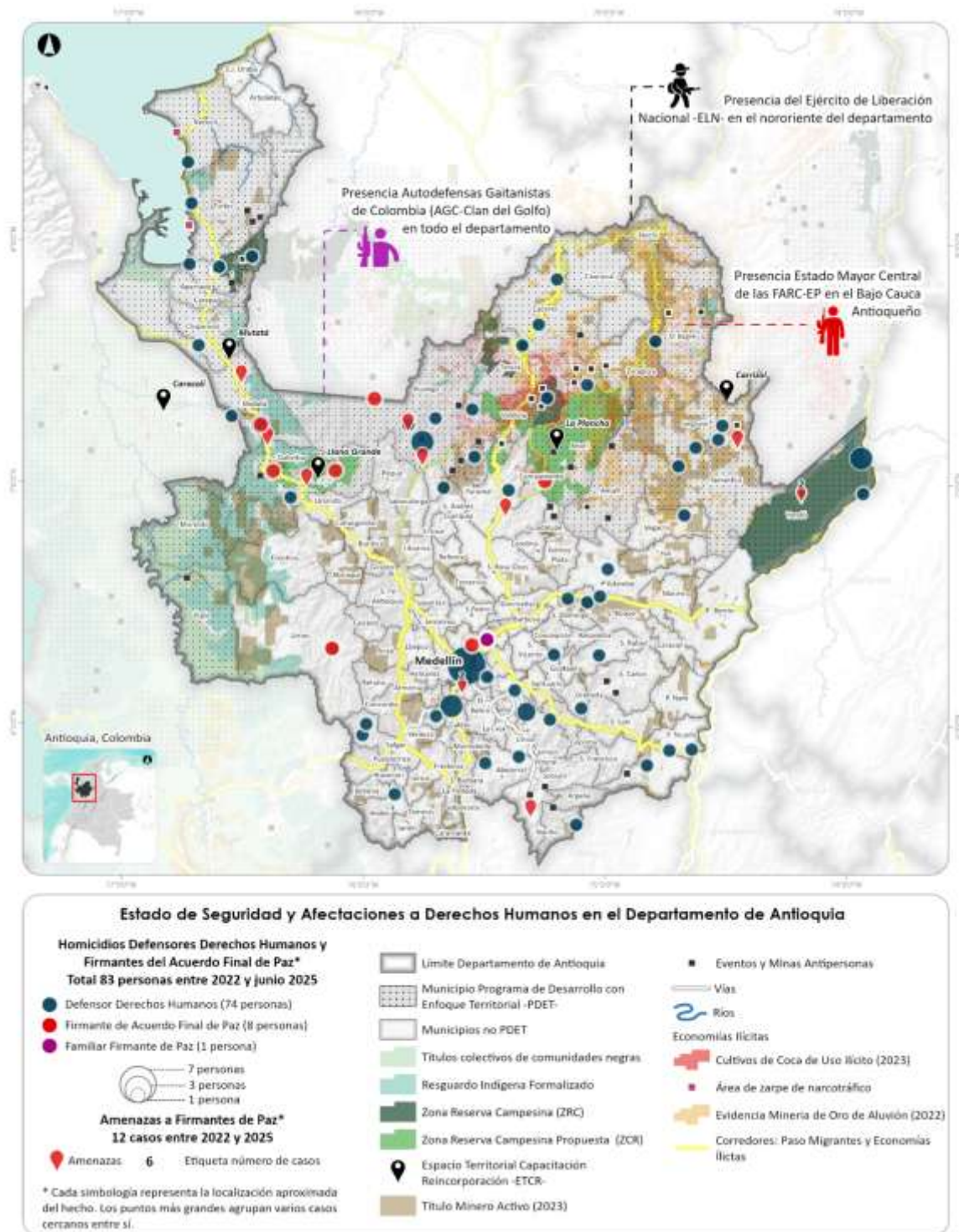
A pesar de este panorama adverso, las comunidades del Bajo Cauca, Nordeste y Urabá han impulsado procesos organizativos sólidos, expresados en consejos comunitarios,

organizaciones indígenas, asociaciones campesinas, cooperativas mineras formales, Mesas de Víctimas y espacios de participación del PDET. Estos procesos se han convertido en actores fundamentales para la construcción de paz territorial, la defensa de los derechos colectivos y la recuperación del tejido social en una de las regiones más estratégicas y desafiantes del país.



Mapa 1. Priorización Territorial y Proyección Poblacional

Contexto de seguridad



Mapa 2. Estado de Seguridad y Afectaciones a Derechos Humanos

ALERTAS TEMPRANAS

En Antioquia, se han emitido 12 alertas tempranas estructurales que se encuentran actualmente en estado abierto. Entre ellas están la 002-19 en Valdivia la 009-19 en Cañasgordas, Dabeiba, Peque y Uramita; la 027-19 en Urrao y Frontino; y la 036-19 en Bello. También figuran la 004-20 en Ituango y Briceño; la 032-20 en Medellín; 044-20 que abarca Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Hispania, Jardín y Salgar; la 045-20 en Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza. En Apartadó se encuentra la 051-20 y en Sabanalarga la 052-20. Además, la alerta 011-21 cubre Angostura, Campamento, San Andrés de Cuerquia, Toledo y Yarumal. Las alertas 008-22 y 013-22, de inminencia, se encuentran en Titiribí, Fredonia y Venecia respectivamente. Otra alerta estructural abierta, la 023-22 abarca Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí. La última alerta generada en el departamento es la 019-25 en el municipio de Briceño.

ÍNDICE DE RIESGO DE VICTIMIZACIÓN

El 6% de los municipios del departamento tienen un IRV alto, este porcentaje corresponde a seis (6) municipios PDET. Briceño, Cáceres, Valdivia, Ituango, Anorí y Taraza. Y dos (2) municipios ZOMAC, Campamento y Argelia. Además, el 23% está en un IRV medio alto y 14% en un IRV medio. Este porcentaje corresponde a 18 municipios de los cuales 10 son PDET. En contraste el 7% de los municipios del país tienen un riesgo alto de ocurrencia de violaciones a los Derechos Humanos o infracciones al DIH, 9% tiene un nivel de riesgo medio alto y 16% medio.

El IRV en Antioquia no solo es un indicador de violencia, sino el reflejo de una convergencia entre desigualdad social, fragilidad ambiental y disputas históricas por el control de recursos y corredores estratégicos. Esto exige intervenciones integrales que articulen seguridad humana, desarrollo rural, protección ambiental y mayor presencia institucional efectiva en los territorios más afectados.

CONFLICTOS SOCIALES Y ÉTNICOS

La región de Tulapas, ubicada entre los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, constituye uno de los epicentros históricos de conflictividad territorial en Antioquia. Su extensión de 59 mil hectáreas, su fertilidad para proyectos agroforestales y ganaderos, y su ubicación estratégica frente al Caribe y corredores comerciales han generado un fuerte interés económico, legal e ilegal, que alimentó procesos de despojo y violencia. Durante la ocupación paramilitar de los años noventa y comienzos de los 2000 se produjo un desplazamiento masivo de comunidades campesinas, cuyas tierras fueron posteriormente adquiridas de manera ilegal por el Fondo Ganadero de Córdoba (FGC), hoy investigado por prácticas fraudulentas de compra de predios y por su papel en la consolidación del despojo. Estas dinámicas configuraron una conflictividad social marcada por la disputa territorial, la violencia sistemática contra la población rural y el uso del despojo como instrumento económico y de control social.

En septiembre de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz realizó una inspección judicial en Tulapas en el marco del Caso 04, con el fin de evaluar el estado actual del territorio, las plantaciones, los predios cautelados y las condiciones de seguridad comunitaria. La diligencia, acompañada por instituciones estatales como la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución y el ICA, permitió recoger información jurídica y testimonios que evidencian las persistentes tensiones relacionadas con el acceso a tierra, el abandono institucional, los conflictos por el repoblamiento y los riesgos ambientales asociados a la explotación agroforestal. Las comunidades campesinas participaron activamente, expresando preocupaciones sobre sus condiciones de vida, las vías de acceso, la presencia limitada del Estado y la continuidad de amenazas derivadas de actores ilegales y disputas territoriales.

La inspección también visibilizó la responsabilidad de terceros civiles en el despojo, entre ellos seis comparecientes del FGC vinculados a las compras fraudulentas de predios y prácticas de constreñimiento, lo que evidencia la dimensión estructural de la conflictividad: no solo armada, sino también económica, empresarial y política. En clave restaurativa, la jornada representó un hito, pues por primera vez en tres décadas múltiples instituciones ingresaron coordinadamente a Tulapas para escuchar directamente a las víctimas y reconocer las afectaciones colectivas.

Este caso ilustra cómo las conflictividades sociales y étnicas en Urabá se entrelazan con intereses económicos, ausencia estatal prolongada y la disputa por territorios estratégicos, configurando un escenario donde el despojo, la exclusión y la precarización de la vida campesina continúan alimentando tensiones que requieren respuestas integrales, restaurativas y con enfoque territorial.

ÍNDICE GINI

En el departamento el índice GINI es de: 0,87 mientras que en el país es de 0,89, una diferencia apenas relevante entre el promedio nacional y departamental.

El Índice Gini para Antioquia revela desigualdades profundas y persistentes que no pueden explicarse únicamente por dinámicas económicas, sino también por factores institucionales y de gobernanza que afectan la distribución del bienestar en el territorio. Mientras subregiones como el Valle de Aburrá concentran mayores capacidades institucionales, inversión pública, infraestructura y oferta de servicios sociales, territorios como el Bajo Cauca, el Nordeste, Occidente, Urabá y el Magdalena Medio presentan capacidades administrativas limitadas, baja cobertura estatal y mayores niveles de informalidad. Estas disparidades institucionales reproducen y amplifican el Gini territorial, generando espacios donde la gobernanza es débil o fragmentada y donde actores armados ocupan vacíos de autoridad.

SENTENCIAS, ÓRDENES JUDICIALES Y/O MACRO CASOS

Restitución de tierras en Antioquia: Yineth Pérez, presidenta de la mayor organización de reclamantes de tierras de Colombia fue restituida en Turbo, zona de Tulapas. Su caso es estudiado por la JEP para documentar patrones de despojo, representando un hito en la lucha por los derechos agrarios. Desde 2018 Antioquia ha recibido 1,891 sentencias de restitución, de las cuales 152 corresponden a Apartadó. Tulapas simboliza la resistencia frente al despojo de tierras a campesinos.

Macrocaso 04 - Urabá antioqueño: la JEP investiga hechos del conflicto armado (1986-2016) en seis municipios priorizados (Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá) del Urabá antioqueño. Basándose en 29 informes se han identificado violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, con un impacto especial en los pueblos étnicos y sus territorios.

Unión de los macrocasos 03 y 04: La JEP unió las investigaciones de los asesinatos y desapariciones forzadas cometidas por la Fuerza Pública en el Cementerio Las Mercedes (Dabeiba, Antioquia) y los hechos del conflicto en Urabá. Esta integración busca esclarecer los crímenes y reconocer el impacto diferencial en las comunidades afectadas abordando la gravedad de los eventos entre 1997 y 2007.

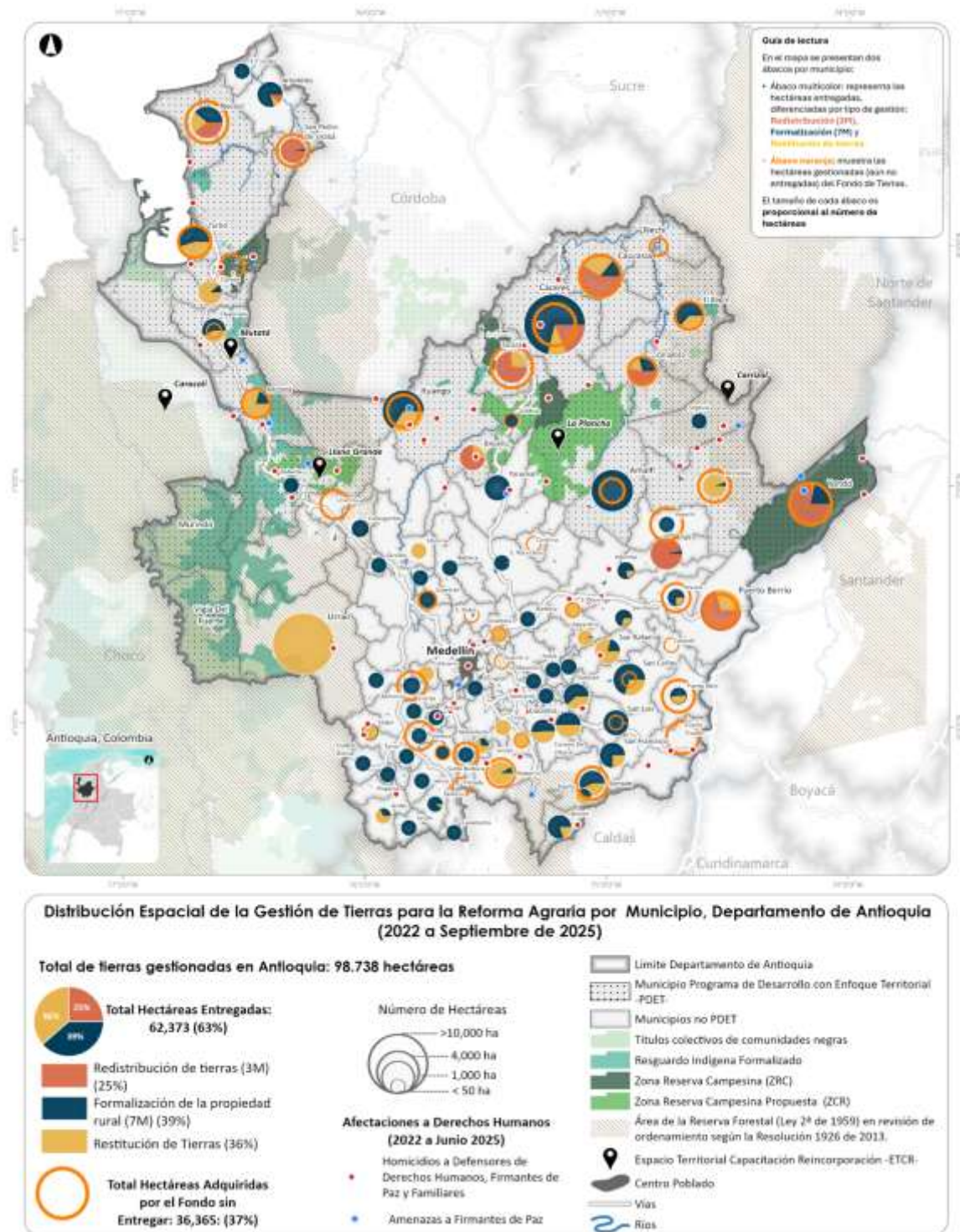
MESA DE ARTICULACIÓN

En 2025, la Mesa Articuladora de Entidades Implementadoras del Acuerdo de Paz ha fortalecido significativamente su papel como instancia de articulación territorial y de seguimiento técnico a la implementación del Acuerdo Final en Antioquia. Durante este año, la Mesa ha sesionado en tres ocasiones, consolidándose como un espacio clave para la coordinación interinstitucional y la acción conjunta en los territorios.

Estas sesiones han permitido articular ferias de servicios institucionales en municipios priorizados, orientadas a acercar la oferta del Estado a comunidades afectadas por el conflicto, promover el acceso a derechos y fortalecer iniciativas locales de paz. Asimismo, la Mesa ha avanzado en la identificación, sistematización y abordaje de cuellos de botella que persisten en la implementación, especialmente en temas como inversiones PDET, reincorporación económica y social de firmantes de paz, reparación colectiva, búsqueda y acompañamiento a familias de personas desaparecidas, y fortalecimiento de la gobernanza territorial.

A partir de estos análisis, se han promovido rutas de activación rápida entre entidades, mecanismos de seguimiento progresivo y acciones coordinadas con actores locales y nacionales, permitiendo dar respuestas más integrales, oportunas y alineadas con las necesidades de los territorios. De esta manera, en 2025 la Mesa del Sector Paz reafirma su papel como articuladora estratégica y como herramienta efectiva para dinamizar la presencia institucional, mejorar la coordinación operativa y avanzar en la transformación de las condiciones que históricamente han afectado a las comunidades en los territorios PDET y demás zonas priorizadas del departamento.

REFORMA RURAL INTEGRAL: ¿COMO VA LA REFORMA RURAL INTEGRAL?



Mapa 3. Gestión de Tierras Para La Reforma Agraria

ENTREGAS, FORMALIZACIÓN Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS.

En el departamento de Antioquia, el Fondo de Tierras ha adjudicado 249,7 hectáreas entre 2023 y 2024, beneficiando a 113 personas. Las entregas se concentraron principalmente en los municipios de Briceño (119,6 hectáreas), Anorí (52,3 hectáreas) e Ituango (50 hectáreas), territorios históricamente afectados por el conflicto armado. Los principales beneficiarios han sido familias campesinas con 112,9 hectáreas, mientras que las víctimas del conflicto armado accedieron a 136,8 hectáreas, reflejando un enfoque equilibrado entre reparación y fortalecimiento productivo. Estas adjudicaciones consolidan los avances del Fondo en zonas PDET del norte y Bajo Cauca antioqueño.

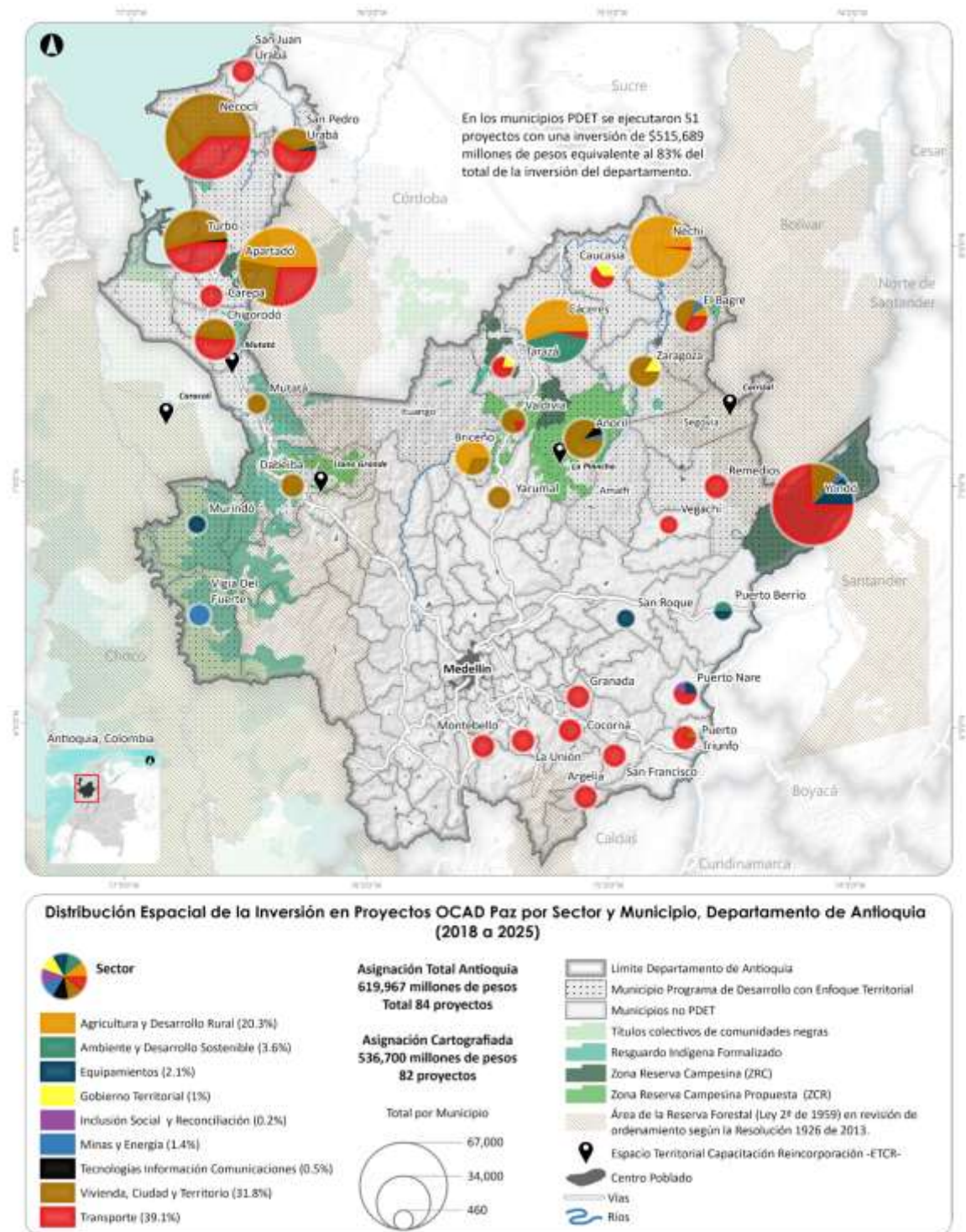
En el departamento de Antioquia, los procesos de formalización de la propiedad rural comprenden 10.568,1 hectáreas, con 1.436 beneficiarios. Las mayores áreas formalizadas se concentran en los municipios de Cáceres (5.125 ha), Amalfi (1.602 ha), Yondó (660,5 ha) que se analiza también en la ficha del Magdalena Medio. Los principales beneficiarios corresponden a familias campesinas, que concentran 9.499 hectáreas, seguidas por consejos comunitarios en comunidades negras (50,5 ha) y población víctima (675,6 ha). Estas acciones fortalecen la seguridad jurídica y productiva sobre la tierra en regiones de alta conflictividad, contribuyendo al ordenamiento social y territorial de las áreas rurales del norte y oriente antioqueño.

El departamento de Antioquia registra 1.810 predios entregados o compensados en cumplimiento de fallos judiciales de restitución de tierras, de los cuales 338 corresponden al Gobierno de Petro, lo que representa un crecimiento relativo del 23,0 % frente al acumulado antes del Gobierno actual. Los mayores avances históricos en términos de predios se concentran en San Carlos (481), Montebello (154) y El Bagre (78), mientras que los municipios con mayor crecimiento relativo en el actual periodo son San Rafael (633 %), Zaragoza (400 %) y Carepa (200 %). Mientras que en términos de hectáreas, se alcanzó un histórico de 23.066,4, de las cuales las 7.407,1 restituidas en este gobierno, equivalen a un crecimiento relativo del 47,3 %.

Destacan aumentos importantes en Zaragoza (92.243 %), Girardota (3.622 %) y San Rafael (1.587 %), mientras que Cáceres, Turbo y San Carlos reúnen las mayores extensiones en el histórico restituidas del departamento.

Adicionalmente, en relación con el componente étnico en Antioquia se han restituido 14.772,7 ha a 457 familias (1.774 personas). Todas las entregas corresponden al Gobierno de Petro: en Ituango, a la Comunidad del Pueblo Emberá Katío del Resguardo Indígena Jaidukamá (2.143,96 ha); en Urrao, al Consejo Comunitario por la Identidad Cultural de Mandé (12.394,98 ha); y en Zaragoza, al Consejo Comunitario Afrodescendiente Pueblo Nuevo (233,74 ha).

INVERSIONES PATR.



Mapa 4. Inversión Proyectos OCAD Paz.

Para el caso del departamento de Antioquia, como otros departamentos, algunos de los proyectos PATR desarrollados son macroregionales, por lo tanto, el mismo proyecto puede ser contabilizado en el análisis de otro Departamento, esta advertencia está presente en todas las Fichas de Departamentos en donde se desarrollan Proyectos Macroregionales.

Para el Periodo del gobierno Actual se identifican 221 proyectos, con la siguiente distribución sectorial.

SECTOR	NÚMERO DE PROYECTOS
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	15
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	29
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	3
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	21
CULTURA	1
DEPORTE Y RECREACIÓN	9
EDUCACIÓN	44
GOBIERNO TERRITORIAL	11
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	25
MINAS Y ENERGÍA	4
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	5
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	2
TRANSPORTE	42
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	10
Total general	221

El estado de los proyectos de acuerdo con la clasificación de la Agencia de Renovación del Territorio puede ser: Estructurado, Estructurado - Financiado, En ejecución y Ejecutado. Para el Departamento de Antioquia se presenta la siguiente distribución.

ESTADO DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS
ESTRUCTURADO	18
ESTRUCTURADO Y FINANCIADO	35
EN EJECUCIÓN	68
TERMINADO	100
Total general	221

También, la concurrencia de recursos para lograr su financiación es diversa Obras PDET, Cooperación Internacional, El Mecanismo de Obras Por Impuesto, La Bolsa de OCAD

PAZ, PROYECTOS PDET financiados por la ART y otros recursos del Sistema General de Regalías (corrientes), para el caso del Departamento tenemos la siguiente concurrencia.

FUENTE DE RECURSOS	NÚMERO DE PROYECTOS
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	2
OBRAS POR IMPUESTOS	44
OCAD PAZ	7
PROYECTOS PDET - ART	74
SGR - CORRIENTES	94
Total general	221

Según el reporte del Sistema de Información Oficial de Cooperación Internacional – APC Colombia, en Antioquia se registra una inversión total de USD 125.259.121 asociada a la implementación del Acuerdo Final, ejecutada entre el 1 de enero de 2017 y el 1 de agosto de 2025. Por origen del recurso, el mayor peso financiero corresponde a Estados Unidos, que concentra USD 84.263.832 (67,27%) del total, seguido por Naciones Unidas (USD 16.558.717; 13,22%). También se destacan los aportes de Implementadores de Paz (USD 4.472.897; 3,57%), Noruega (USD 4.141.465; 3,31%), Suecia (USD 3.422.831; 2,73%), Privado & Filantropía (USD 3.009.030; 2,40%) y la Unión Europea (USD 2.269.134; 1,81%), configurando un esquema de financiamiento dominado por la cooperación bilateral, con apoyo complementario multilateral y no gubernamental.

ORIGEN DEL RECURSO	APORTE (USD)	Suma de VALOR APORTE (USD)
Alemania	\$ 2.180.047	1,74%
Australia	\$ 25.976	0,02%
Canadá	\$ 178.141	0,14%
Dinamarca	\$ 619	0,00%
España	\$ 1.132.076	0,90%
Estados Unidos	\$ 84.263.832	67,27%
Francia	\$ 617.025	0,49%
Implementadores de Paz	\$ 4.472.897	3,57%
Italia	\$ 1.160.877	0,93%
Japón	\$ 78.004	0,06%
Luxemburgo	\$ 253	0,00%
Multilaterales	\$ 38.243	0,03%
Naciones Unidas	\$ 16.558.717	13,22%
Noruega	\$ 4.141.465	3,31%
Nueva Zelanda	\$ 1.076.089	0,86%

Privado & Filantropía	\$ 3.009.030	2,40%
Reino Unido	\$ 77.489	0,06%
Suecia	\$ 3.422.831	2,73%
Suiza	\$ 556.374	0,44%
Unión Europea	\$ 2.269.134	1,81%
Total, general	\$ 125.259.121	100,00%

La distribución por punto del Acuerdo muestra una clara concentración en Reparación de víctimas (USD 38.879.951; 31,04%) y Implementación, verificación y refrendación (USD 36.298.696; 28,98%), seguidas por Reforma Rural Integral (USD 16.207.737; 12,94%), Solución al problema de las drogas ilícitas (USD 14.419.627; 11,51%) y Participación política (USD 13.715.381; 10,95%). Territorialmente, los recursos se concentran de manera significativa en las subregiones Bajo Cauca Antioqueño y Urabá Antioqueño, que agrupan montos relevantes en varios puntos del Acuerdo: en Reparación de víctimas, el Bajo Cauca concentra USD 8.453.793 y Urabá USD 7.050.765; en Reforma Rural Integral, el Bajo Cauca registra USD 6.441.165 y Urabá USD 1.501.050; y en Solución al problema de las drogas ilícitas, Urabá Antioqueño alcanza USD 859.732 y el Bajo Cauca USD 1.835.509.

PUNTO DEL ACUERDO	APORTE (USD)	Suma de VALOR APORTE (USD)
1. Reforma Rural Integral	\$ 16.207.737	12,94%
2. Participación política	\$ 13.715.381	10,95%
3. Fin del Conflicto	\$ 5.087.606	4,06%
4. Solución al problema de las drogas ilícitas	\$ 14.419.627	11,51%
5. Reparación de víctimas	\$ 38.879.951	31,04%
6. Implementación, verificación y refrendación	\$ 36.298.696	28,98%
Capítulo de Género	\$ 650.123	0,52%
Total, general	\$ 125.259.121	100,00%

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL AFP

En términos municipales, se destacan Medellín (USD 5.945.088; 4,75%), Apartadó (USD 2.442.442; 1,95%), Carepa (USD 2.666.732; 2,13%), Caucasia (USD 2.402.972; 1,92%), El Bagre (USD 2.244.657; 1,79%), Anorí (USD 2.698.426; 2,15%), Nechí (USD

2.036.181; 1,63%) y Turbo (USD 2.063.231; 1,65%), mientras que USD 75.899.625 (60,59%) se reportan sin desagregación municipal. En cuanto al estado de implementación, USD 72.140.660 (57,59%) corresponden a proyectos en ejecución, frente a USD 53.118.461 (42,41%) ya finalizados.

Los proyectos en ejecución abarcan líneas de desminado humanitario, reparación integral a víctimas, justicia y derechos humanos, reincorporación, dinamización productiva y fortalecimiento institucional. Se incluyen intervenciones de alcance departamental como el apoyo a la MAPP/OEA Colombia, Tejiendo Dignidad en la JEP, Colombia Transforma 3, Justicia Inclusiva, ProDefensoras II, la *Red Nacional de Jóvenes por la Reconciliación y la Paz Territorial y Restaurando Nuestro Futuro (ROF). A nivel territorial, se desarrollan acciones de desminado humanitario en Urrao, Carepa, Remedios y Segovia; proyectos de seguridad alimentaria y agricultura en Apartadó y Medellín; iniciativas de reparación y memoria en municipios del Bajo Cauca; y procesos de desarrollo territorial y reconciliación en municipios del Urabá Antioqueño, incluyendo Apartadó, Carepa, Mutatá, Necoclí y Turbo, así como en Medellín.

DESARROLLO RURAL DESDE LA ADR

Durante el periodo del gobierno actual, la Agencia de Desarrollo Rural registra en Antioquia un total de 398 organizaciones de pequeños productores y/o ACEFC beneficiadas y 18.731 productores beneficiados, a través de estrategias orientadas a la comercialización, el fortalecimiento de capacidades y la articulación con compras públicas. La mayor incidencia corresponde a las Ruedas de Negocios de Compras Públicas, con 92 organizaciones beneficiadas y 11.057 productores beneficiados, concentradas principalmente en Medellín (51 organizaciones y 9.228 productores) y Chigorodó (10 organizaciones y 1.829 productores). En segundo lugar, los Mercados Campesinos suman 191 organizaciones beneficiadas y 2.897 productores beneficiados, con presencia destacada en Yarumal (7 organizaciones y 1.452 productores), Medellín (55 organizaciones y 1.104 productores), Cáceres (46 organizaciones y 60 productores) y Mutatá (27 organizaciones y 66 productores), entre otros municipios. A su vez, las Ferias Campesinas registran 87 organizaciones beneficiadas y 4.710 productores beneficiados, con una alta concentración en Medellín (39 organizaciones y 2.887 productores) y Apartadó (13 organizaciones y 1.823 productores). De manera complementaria, el Proceso de formación con enfoque comercial reporta 28 organizaciones beneficiadas y 67 productores beneficiados, con acciones distribuidas en Ciudad Bolívar, Sonsón y en esquemas subregionales que agrupan varios municipios. Además de Procesos de formación con enfoque comercial en los municipios de Alejandría, Cáceres, Valdivia, Támesis, Ituango, Hispania, El Bagre, Tarazá, Caucasia, San Carlos que benefician a 20 productores.

En el componente productivo se registra el fortalecimiento a 33 proyectos, con un total de 985 beneficiarios. En términos de enfoque poblacional, la intervención reporta 310 mujeres rurales beneficiadas, 83 jóvenes rurales, 41 personas con discapacidad y 513 víctimas del conflicto armado. El mayor volumen de beneficiarios se concentra en las líneas de Plátano (5 proyectos; 449 beneficiarios) y Arroz (3 proyectos; 328 beneficiarios), seguidas por Cuyicultura (3 proyectos; 66 beneficiarios), Maní (2 proyectos; 52 beneficiarios), Cacao-Plátano (un proyecto; 50 beneficiarios) y Cacao,

Plátano, Coco y Maderables (un proyecto; 40 beneficiarios). La tabla también incluye 16 proyectos de Mercado Campesino, un proyecto de Piscicultura y un proyecto de Búfalo–Leche.

CATASTRO MULTIPROPÓSITO

El departamento de Antioquia con 2.427,09 ha de Catastro Multipropósito corresponde al 17,46% de avance total país. Se distribuye en 95,67 hectáreas urbanas (3,9%) y 2.331,42 hectáreas rurales (96,1%). El componente urbano es pequeño y altamente concentrado: cerca del 67% proviene de Medellín (31,43 ha), Sabaneta (17,76 ha) y Bello (14,84 ha).

En contraste, el catastro rural presenta cerca de las 100 hectáreas para municipios como Andes, Barbosa, Buriticá, Cacerés, Caicedo, Jardín, Támesis, Valparaíso, Granada, San Luis, Peñol, Guatapé, Retiro, La Pintada, Marinilla, Nariño, Montebello, San Gerónimo, San Luis, Santa Barbara, Santa Fe de Antioquia, Tamesis, Tarso, Valparaíso y Yalí, lo que define un patrón de énfasis rural con anclajes urbanos puntuales en el Valle de Aburrá.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA ¿LAS COMUNIDADES ESTÁN PARTICIPANDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ?

CONSEJOS TERRITORIALES DE PAZ

Antioquia presenta un alto nivel de institucionalización de los Consejos Territoriales de Paz, con 49 municipios que mantienen sus CTP activos y con acto administrativo vigente. Sin embargo, solo 36 han avanzado hacia la formulación de un Plan de Acción y apenas 19 cuentan con recursos asignados, todos de origen local, lo que evidencia un esfuerzo municipal sostenido, aunque con limitaciones de financiación nacional. Cuatro de estos municipios —Briceño, Cáceres, Mutatá y Remedios— son PDET, lo que permite articular las agendas de paz territorial con los instrumentos de desarrollo rural y participación ciudadana.

VEEDURÍAS EN ASUNTOS DE PAZ

En el departamento de Antioquia se ha conformado una Veeduría en Asuntos de Paz, integrada por lideresas y líderes de las Mesas Comunitarias Municipales (MCM). Su propósito principal es el seguimiento y control ciudadano a la implementación del PDET en el marco del Acuerdo de Paz, promoviendo la transparencia y la participación comunitaria en los procesos de desarrollo territorial. La veeduría actualmente funciona en el municipio de Apartadó, mientras dos nuevas veedurías se encuentran en proceso de conformación en los municipios de Mutatá y Chigorodó, fortaleciendo la red de control social en la subregión de Urabá.

EMISORAS DE PAZ

En el departamento de Antioquia se ubica una emisora de paz en el municipio de Ituango, la cual transmite en el dial 92.3 FM. Hace parte de la red nacional de RTVC creada en desarrollo del Acuerdo Final de Paz, con el propósito de promover la información, la cultura de paz y la participación ciudadana en los municipios priorizados del norte del departamento.

ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN

Según los registros del Consejo Nacional Electoral (CNE) a corte de septiembre de 2025, en el departamento de Antioquia se reportan 10 fuerzas políticas con declaraciones departamentales. De estas, 6 corresponden a partidos de gobierno, 1 a fuerza independiente y 3 a oposición.

Los partidos de gobierno son Alianza Verde, Cambio Radical, Conservador, Liberal, Mira y Partido de la U; el independiente está representado por el Centro Democrático; y los partidos de oposición son MAIS, ASI y Polo Democrático Alternativo, en el marco del Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018).

En el nivel municipal, se registran 670 declaraciones, de las cuales el 53,9 % corresponden a partidos de gobierno (361), el 36,6 % a independientes (245) y el 9,5 % a oposición (64), evidenciando una mayoría clara del bloque oficialista.

Dentro del gobierno, tres colectividades concentran casi la mitad de las declaraciones: Partido Liberal (19,4 %), Conservador (16,6 %) y Partido de la U (13,8 %), lo que refleja su predominio territorial y su alta representación en alcaldías y concejos.

En el grupo independiente, que representa más de un tercio del total, se destacan Conservador (17,9 %), Cambio Radical (15,5 %) y Liberal (14,7 %), confirmando la diversidad de posturas internas dentro de los partidos con amplia presencia local.

La oposición, aunque minoritaria, mantiene actividad con representación distribuida entre Alianza Verde (17,2 %), Conservador (17,2 %), Liberal (15,6 %) y Centro Democrático (14 %), lo que evidencia que las colectividades de mayor base territorial conservan capacidad de incidencia incluso desde la disidencia política.

En conjunto, los resultados reflejan un escenario de mayoría oficialista, con un bloque independiente relevante y una oposición minoritaria pero institucionalmente activa, donde la representatividad territorial sigue siendo el principal factor de configuración de las posturas políticas en el departamento.

Cabe resaltar el caso de Medellín, la segunda ciudad más importante del país y la de mayor acompañamiento por la estrategia territorial de la Unidad de Implementación del

Acuerdo de Paz, donde la dinámica política local representa un laboratorio clave para el ejercicio de la oposición y la participación ciudadana en el ámbito urbano.

REINCORPORACIÓN: ¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO PARA QUE LAS PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN TRANSFORMEN SU VIDA?

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRAFICA PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN.

ANTIOQUIA	# Personas
Firmantes Acuerdo	1480
Firmantes Activos	1252
Hombres	1134
Mujeres	346
Certificados Como Menores de edad	61
Étnicos	257
Pertenecientes a la comunidad LGBTI	22
Con Discapacidad	252

Rango de Edades.	Número
de 18 a 28 años	118
de 29 a 44 años	703
de 45 a 59 años	349
de 60 o más años	86

REGIÓN PDET	Número
NO PDET	674
BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO	233
CHOCÓ (Vigía del Fuerte)	56
SUR DE BOLIVAR (Yondó)	23
URABÁ ANTIOQUEÑO	494
Total general	1480

PROYECTOS PRODUCTIVOS

ANTIOQUIA	
TIPO DE PROYECTO	NÚMERO
Colectivo	11
Individual	412
Total, general	423

Distribuidos en 57 municipios.

INDIVIDUALES	
LINEA PRODUCTIVA	NÚMERO

Agrícola	35
Comercio	117
Industrial	30
Pecuario	196
Servicios	34
Total, general	412

BENEFICIARIOS	NÚMERO
Total, Integrantes de Proyectos	520
Número Hombres	397
Número Mujeres	123

COLECTIVOS	
LINEA PRODUCTIVA	NÚMERO
Agrícola	1
Apicultura	1
Comercialización	1
Comercio	1
Confecciones	1
Ganadería	2
Piscicultura	1
Servicio	1
Servicio Telecomunicaciones	1
Turismo	1
Total, general	11

BENEFICIARIOS	
Total, Integrantes de Proyectos	298
Número Hombres	207
Número Mujeres	91

SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS ¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO PARA ATENDER EL PROBLEMA DE LAS DROGAS Y LOS CULTIVOS DE USO ILÍCITO

PNIS-RENHACEMOS

En los municipios antioqueños priorizados por los programas PNIS, PDET y ZOMAC — Anorí, Briceño, Cáceres, Ituango y Tarazá— se registran en conjunto 9.547 familias vinculadas a actividades productivas. De ellas, 6.646 (69,6 %) son familias cultivadoras, 1.447 (15,1 %) no cultivadoras y 1.454 (15,2 %) recolectoras.

En total, 8.943 familias cuentan con asistencia técnica integral, 5.098 participan en ciclos productivos de corto plazo y 7.949 en ciclos de largo plazo, con cobertura de acompañamiento técnico y orientación hacia distintos tipos de producción agrícola.

En el marco del nuevo programa de sustitución RENHACEMOS, se prioriza en el departamento de Antioquia el municipio de Ituango.

EL DESMINADO HUMANITARIO

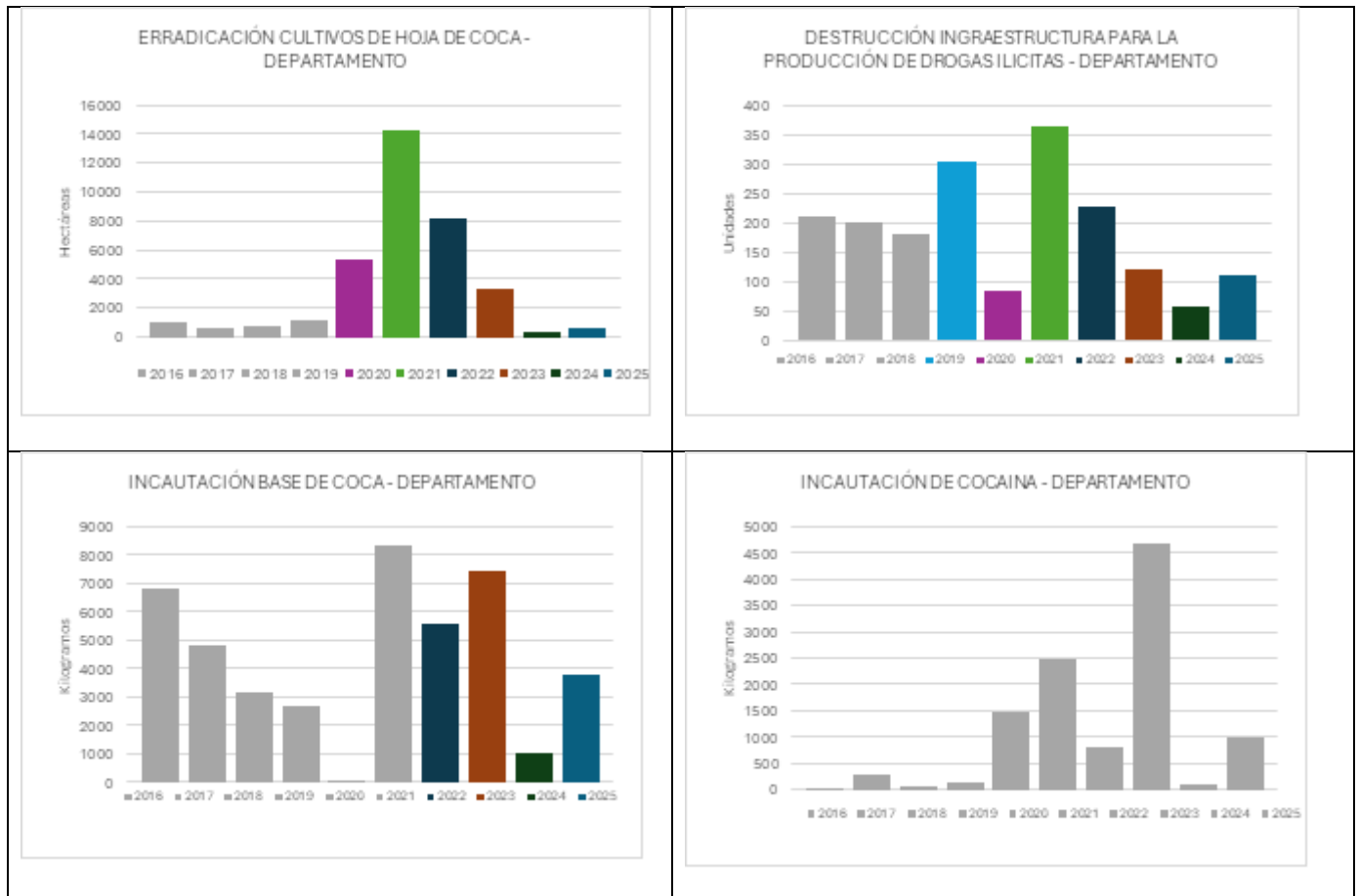
Desde el inicio del Gobierno de Juan Manuel Santos (2010), el departamento de Antioquia ha acumulado 6.466 reportes comunitarios por sospechas de presencia de minas antipersonales, con mayor concentración histórica en los municipios de Anorí, Ituango, Tarazá, Valdivia, San Carlos, San Francisco y Granada.

Durante este periodo se identificaron 939 áreas, se despejaron 933 y se destruyeron 1.211 artefactos, con operaciones destacadas en San Carlos, San Luis, Granada, Sonsón, San Rafael, Apartadó, Campamento y Argelia, lo que refleja una amplia trayectoria operativa en el territorio y un esfuerzo sostenido de intervención.

En el Gobierno del presidente Gustavo Petro (2022–2025) se registran 147 nuevos reportes, lo que representa una reducción significativa en la frecuencia anual, pasando de un promedio histórico de 539 a cerca de 49 reportes por año. Paralelamente, las operaciones de desminado se intensifican, con 147 áreas identificadas, 163 despejadas y 601 artefactos destruidos durante este periodo.

Sobresalen por su actividad reciente los municipios de Argelia (con altos niveles de despeje y destrucción), Campamento, San Carlos, Apartadó, Remedios y Segovia. No obstante, persisten vacíos operativos en municipios con alta carga histórica y baja intervención actual, como Ituango, Tarazá y Valdivia, lo que señala la necesidad de recalibrar el despliegue territorial hacia zonas con mayor concentración de riesgo.

LUCHA CONTRA LAS DROGAS



Con corte al tercer trimestre de 2025, Antioquia muestra una reconfiguración operativa clara en la política de control de drogas. Los datos revelan una correlación inversa entre las incautaciones de base de coca —en descenso progresivo— y las de cocaína —en aumento sostenido—, lo que indica un desplazamiento de la acción institucional hacia los eslabones finales de la cadena. Aunque la destrucción de infraestructura para el procesamiento no alcanza los niveles observados en 2020, sí evidencia una recuperación constante desde 2023, con una tendencia estable durante 2025.

El comportamiento departamental refleja una alineación con la estrategia nacional de concentrar los esfuerzos en la interdicción y neutralización de laboratorios, redes logísticas y estructuras de financiación, más que en la erradicación de cultivos. Esta transición se ha fortalecido en zonas priorizadas como el Bajo Cauca, el Nordeste y el Urabá antioqueño —subregiones históricamente impactadas por economías ilícitas y presencia de grupos armados—, donde los esfuerzos combinan intervención operativa, desarrollo alternativo y presencia institucional sostenida.

El cambio de enfoque del gobierno nacional —centrado en la seguridad humana y la sustitución integral— se traduce en una política territorial más diferenciada, que reconoce la diversidad de dinámicas del narcotráfico en Antioquia: desde enclaves de producción y transformación hasta corredores de transporte y exportación. En este contexto, la política pública busca romper los vínculos entre economías ilícitas y conflictividad local, mediante la articulación de los programas RENHACEMOS, PDET y las acciones de estabilización impulsadas por la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

VÍCTIMAS Y REPARACIÓN INTEGRAL: ¿SE LES ESTÁ CUMPLIENDO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO?

Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) y Planes de Retorno y Reubicación (PRYR).

TIPO DE SRC	Número
COMUNIDAD CAMPESINA	36
COMUNIDAD INDÍGENA (Decreto 4633 de 2011)	33
COMUNIDAD NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA (Decreto 4635 de 2011)	27
GRUPO	1
GRUPO OSIGD-LGBTI	2
ORGANIZACIONES	6
ORGANIZACIONES DE MUJERES	1
Total, general	106

En Antioquia se han reconocido 106 Sujetos de Reparación Colectiva. La distribución muestra un peso casi equilibrado entre comunidades campesinas (36 casos, 34,0 %), indígenas (33 casos, 31,1 %) y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (27 casos, 25,5 %), que en conjunto concentran más del 90 % de los sujetos. En menor medida se encuentran organizaciones sociales (6 casos, 5,7 %), grupos OSIGD-LGBTI (2 casos, 1,9 %), una organización de mujeres (0,9 %) y un grupo no étnico ni campesino (0,9 %).

Este panorama refleja una política de reparación colectiva en Antioquia con una alta diversidad de sujetos, donde convergen procesos étnicos, campesinos y sociales, incluyendo experiencias de reparación a sectores diferenciales como la población LGBTI y organizaciones de mujeres.

FASES	NÚMERO
Alistamiento	15
Caracterización del Daño	5
Diseño y Formulación	12
Identificación	37
Implementación	29
Implementado	8
Total general	106

En Antioquia, los 106 Sujetos de Reparación Colectiva se encuentran distribuidos en diferentes fases del proceso. La mayoría está en Identificación (37 casos, 34,9 %), seguida de un grupo importante en Implementación (29 casos, 27,4 %). En las fases tempranas aparecen Alistamiento (15 casos, 14,2 %), Diseño y Formulación (12 casos, 11,3 %) y Caracterización del Daño (5 casos, 4,7 %). Finalmente, 8 sujetos (7,5 %) ya alcanzaron la fase de Implementado, lo que convierte a Antioquia en uno de los departamentos con mayor número de procesos culminados.

En Antioquia, aunque hay más de un centenar de Sujetos de Reparación Colectiva, solo una parte de ellos reporta porcentajes de avance en la implementación. Entre estos, se observa un panorama muy diverso: algunos procesos se encuentran en etapas iniciales con avances mínimos —como el Consejo Comunitario Mandé (3 %), la Vereda La Inmaculada (7 %) o la Comunidad Choromando (6 %)—, mientras que otros muestran progresos significativos, cercanos o iguales al cumplimiento total, como el Barrio El Bosque, Cocorná, Paquemás, Pueblo Bello, Tulapas y Argelia (100 %), el Centro Poblado La Balsita (96 %), o los procesos focalizados en municipios como Granada (92 %), San Rafael y El Tres (86 %).

En Antioquia se identifican 102 planes de retorno y reubicación, que se distribuyen de manera desigual en el territorio. Granada y Yondó concentran la mayor presencia con 6 casos cada uno (para el caso de Yondó se registran también en la ficha del Magdalena Medio), mientras que un segundo grupo —Concordia, Mutatá y Puerto Nare— reúne 5 casos por municipio. En la franja siguiente aparecen Carepa, La Unión, Nechí, San Juan de Urabá y Turbo, con 4 casos cada uno, seguidos por Apartadó, Arboletes, Betulia, Santa Fe de Antioquia y Yolombó, con 3. Un conjunto más amplio de municipios (12 en total) participa con 2 casos, y finalmente, 14 localidades aportan apenas 1 caso, mostrando una amplia dispersión territorial pero con polos de mayor concentración en subregiones específicas.

En Antioquia se registran 102 comunidades con planes en seguimiento:

- 9 (9%) no presentan ningún avance (0%).
- 54 (53%) tienen avances bajos (1%–25%).
- 27 (26%) muestran avances intermedios (26%–60%).
- 9 (9%) alcanzan niveles altos (61%–85%).

- 3 (3%) superan el 85% de ejecución.

RECLUTAMIENTO FORZADO

En el departamento se identificaron únicamente dos municipios con Alerta Temprana asociada: Turbo y Necoclí, ambos vinculados a la AT 014/23. Turbo recibió asistencias técnicas en 2023, 2024 y 2025, mientras que Necoclí contó con acompañamiento en 2023 y 2025, lo que muestra que en los dos casos las asistencias se realizaron en el mismo año de emisión de la alerta y en los años posteriores. En contraste, no se registran municipios con alerta sin asistencia técnica posterior. Finalmente, un número importante de municipios, entre ellos Amalfi, Anorí, Apartadó, Bello, Cáceres, Carepa, Caucasia, Dabeiba, Itagüí, Medellín, Murindó, entre muchos otros, recibieron asistencias técnicas en distintos años sin que exista Alerta Temprana asociada

Año	Número Asistencias Técnicas
2022	59
2023	42
2024	44
2025	43
AT con RUUVS	115

TRABAJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES CON CONTENIDO REPARADOR (TOAR)

El departamento de Antioquia cuenta con 22 TOARs certificados distribuidos en 15 municipios. Los municipios con condición PDET son Anorí (3), Apartadó (1), Briceño (1), Dabeiba (1), Mutatá (3), Remedios (1) y Yondó (1). Los municipios No-PDET son Medellín (6), Caicedo (1), Itagüí (1), Marinilla (0), San Rafael (1), Urrao (1), Venecia (1) y Puerto Berrío (1). Antioquia representa el 9.6 % del total nacional de TOARs.

BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

En Antioquia, la UBPD trabaja en las regiones PDET de Bajo Cauca–Norte–Nordeste y Urabá Antioqueño (PRB Bajo Cauca y Valdivia, Nordeste–Nus–Río Porce, Eje Bananero, Norte de Urabá y Sur de Urabá). En conjunto, el universo de personas dadas por desaparecidas asciende a 9.656 casos, con 2.262 solicitudes de búsqueda y 747 con muestra familiar asociada. En Lugares de interés forense en el RNFCIS se registran 846 lugares —predominan campo abierto (374) y cementerios (342), seguidos de cuerpos de agua (70), asentamientos (18) e instalaciones de actor armado (17)—; se han intervenido 57 sitios y se reportan 288 prospecciones, 301 cuerpos recuperados, 20 cuerpos identificados, 14 cuerpos entregados dignamente y 8 personas encontradas con vida.

Adicionalmente a los Planes Regionales de Búsqueda, la Unidad ha adelantado trabajo en zonas no PDET (Cuenca del Río Sucio y Cauca Medio, Norte de Antioquia, Oriente Antioqueño, Valle del Aburrá y Suroeste Antioqueño), que en conjunto suman 12.184

casos de universo, 2.611 solicitudes, 1.022 con muestra familiar asociada, 1.310 lugares de interés forense en el RNFCIS, 167 sitios intervenidos, 392 prospecciones, 434 cuerpos recuperados, 28 cuerpos identificados, 41 cuerpos entregados dignamente y 17 personas encontradas con vida.

La desaparición de personas en Antioquia constituye uno de los retos humanitarios más profundos y persistentes del departamento. Con miles de casos acumulados durante décadas de conflicto, Antioquia se mantiene como uno de los territorios con mayor número de registros ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Fiscalía General de la Nación. Municipios como Ituango, Dabeiba, Turbo, El Bagre, Caucaasia, Sonsón y Medellín concentran un volumen significativo de casos. Antioquia presenta tres condiciones críticas: (1) alta dispersión territorial de los casos y de los posibles lugares de disposición de cuerpos, (2) riesgos de seguridad persistentes en zonas donde operan grupos armados ilegales, y (3) brechas institucionales para garantizar acceso seguro y participación efectiva de familiares buscadores. Estas condiciones hacen indispensable una estrategia de búsqueda diferenciada, sostenida y con fuerte respaldo interinstitucional.

REFLEXIONES FINALES

La implementación del Acuerdo Final de Paz en Antioquia revela un territorio profundamente marcado por desigualdades históricas, conflictividades persistentes y transformaciones institucionales que avanzan, pero a ritmos diferenciados según la subregión. Antioquia, con una presencia significativa de municipios PDET en el Bajo Cauca, Nordeste y Urabá, continúa siendo uno de los departamentos más estratégicos, y al mismo tiempo más desafiantes, para la consolidación de la paz territorial. Las dinámicas de economías ilícitas, disputas por el control territorial, presión sobre ecosistemas estratégicos y debilidades en capacidades institucionales municipales explican la complejidad de los avances y los rezagos observados.

Primero, la situación de seguridad y las conflictividades sociales y étnicas evidencian que Antioquia sigue enfrentando altos niveles de riesgo, especialmente en los municipios PDET, donde confluyen minería ilegal, cultivos de uso ilícito, deforestación, disputas entre grupos armados y presiones sobre territorios colectivos indígenas y afrodescendientes. La persistencia de alertas tempranas abiertas y el alto índice de riesgo de victimización muestran que la seguridad humana continúa siendo un desafío estructural que requiere intervenciones integrales, con enfoque territorial y de protección colectiva.

Segundo, aunque la Reforma Rural Integral presenta avances en materia de adjudicación y formalización de tierras, estos aún son insuficientes frente a la magnitud de la informalidad, la desigualdad en la tenencia y la baja capacidad técnica de los municipios. El Catastro Multipropósito avanza de manera desigual, y la restitución de tierras muestra progresos significativos, especialmente para comunidades étnicas, pero sigue limitada por riesgos de seguridad, conflictividades ambientales y lentitud administrativa.

Tercero, en materia de participación política y ciudadana, Antioquia presenta señales de fortalecimiento a través de Consejos Territoriales de Paz, veedurías comunitarias y

emisoras de paz, aunque persisten brechas relacionadas con financiamiento, asistencia técnica y sostenibilidad. La diversidad del espectro político municipal revela un escenario dominado por fuerzas de gobierno, pero con presencia activa de oposición e independencia, reflejo de una institucionalidad política amplia pero no siempre articulada al cumplimiento de los compromisos del Acuerdo.

Cuarto, la reincorporación avanza con un alto número de proyectos productivos individuales y colectivos, distribuidos en 57 municipios, y con una caracterización diversa de firmantes de paz que incluye comunidades étnicas, población LGBTI y personas con discapacidad. Sin embargo, persisten retos fundamentales: acceso a tierra para proyectos colectivos, continuidad de la asistencia técnica, articulación municipal y condiciones de seguridad. La reincorporación en Antioquia depende de un fortalecimiento más robusto de la política de seguridad humana, particularmente en subregiones con disputas armadas.

Quinto, en relación con la solución al problema de las drogas ilícitas, el departamento evidencia una transición hacia enfoques más integrales como RENHACEMOS, pero aún enfrenta dinámicas complejas en el Bajo Cauca y Nordeste. El enfoque de sustitución, articulado con desarrollo rural y presencia institucional, exige mayor coherencia entre las entidades responsables y un refuerzo en alternativas económicas sostenibles.

Sexto, la reparación integral presenta avances heterogéneos. Aunque Antioquia es uno de los departamentos con mayor número de Sujetos de Reparación Colectiva, muchos procesos permanecen estancados o en fases iniciales. Las brechas son particularmente profundas en comunidades étnicas y campesinas que enfrentan riesgos de seguridad, falta de inversión continua y barreras administrativas. Lo mismo ocurre con los Planes de Retorno y Reubicación, que muestran una dispersión territorial con avances limitados en la mayoría de los casos.

Séptimo, una de las brechas más críticas es la relacionada con el desminado humanitario y la búsqueda de personas desaparecidas. Persisten territorios con alta contaminación por minas y una deuda humanitaria histórica en municipios como Ituango, Tarazá y Valdivia. En cuanto a personas desaparecidas, Antioquia registra uno de los universos más altos del país, con miles de casos y desafíos operativos, de seguridad y de articulación institucional que dificultan avances más rápidos en verdad, esclarecimiento y dignificación.

Octavo, la Mesa del Sector Paz emerge como una de las herramientas más eficaces para articular entidades, identificar cuellos de botella y promover la activación territorial. La experiencia de 2024 y 2025 muestra que cuando Gobernación, alcaldías, entidades nacionales, cooperación internacional y organizaciones sociales trabajan de manera articulada, los avances son más claros y sostenibles. La Mesa tiene el potencial de consolidarse como un mecanismo permanente de seguimiento del Acuerdo en Antioquia.

En conjunto, los avances registrados muestran un compromiso creciente de las instituciones públicas y las comunidades, pero también dejan claro que Antioquia requiere un enfoque más integral, diferencial y sostenido para transformar las desigualdades territoriales, reducir los riesgos de seguridad y acelerar la implementación de los componentes estructurales del Acuerdo de Paz. La presencia integral del Estado, la seguridad humana, la inversión articulada y la participación efectiva de comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y víctimas son condiciones indispensables

para que la implementación del Acuerdo tenga impactos duraderos y transformadores en el departamento.

GLOSARIO DE SIGLAS Y TÉRMINOS

Sigla / término	Desglose y definición
ACEFC	Asociación Campesina / Económica / Familiar / Comunitaria (según reporte ADR). Tipo de organización productiva beneficiaria en intervenciones rurales.
Acuerdo Final	Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto (2016). Marco que organiza los 6 puntos y sus instrumentos de implementación.
ADR	Agencia de Desarrollo Rural. Implementa estrategias productivas, comercialización y fortalecimiento de capacidades rurales.
AICMA	Acción Integral contra Minas Antipersonal. Política/coord. de Estado para prevención, educación en riesgo y desminado.
ANT	Agencia Nacional de Tierras. Administra tierras para RRI (Fondo de Tierras, adjudicación, formalización).
APC	Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. Consolida y reporta proyectos de cooperación asociados al Acuerdo.
ART	Agencia de Renovación del Territorio. Lidera la implementación PDET y seguimiento de proyectos PATR.
ASI	Alianza Social Independiente. Partido político (mencionado en declaraciones del Estatuto de Oposición).
AT	Alerta Temprana (Defensoría del Pueblo). Documento que advierte riesgos y activa acciones preventivas institucionales.
Catastro Multipropósito	Instrumento catastral para información física/jurídica/económica del suelo; soporte de ordenamiento y formalización.

Sigla / término	Desglose y definición
CNE	Consejo Nacional Electoral. Autoridad electoral: declaraciones (gobierno/independiente/oposición) y control electoral.
Consejos Territoriales de Paz (CTP)	Instancias territoriales de participación para la paz; articulan actores y orientan acciones locales.
DD.HH.	Derechos Humanos. Marco de protección de derechos y enfoque de análisis de riesgos y vulneraciones.
Decreto 4633 de 2011	Norma diferencial para víctimas indígenas (mencionada en tipologías de reparación colectiva).
Deforestación / presión ambiental	Factor situacional que condiciona implementación en Amazonía; ligado a economías ilícitas y disputa territorial.
Desminado humanitario	Acciones para despejar/gestionar contaminación por minas y artefactos explosivos con enfoque humanitario.
DIH	Derecho Internacional Humanitario. Reglas aplicables en conflicto armado; base para reportar infracciones.
DSCI	Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos (Gobierno nacional). Coordina instrumentos de sustitución (PNIS).
Emisoras de Paz	Emisoras públicas creadas para pedagogía, información y convivencia en zonas priorizadas del posacuerdo.
ETCR	Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación. Zona asociada a tránsito a la vida civil y proyectos productivos.
Estatuto de la Oposición	Régimen de garantías y reglas para partidos declarados en gobierno, independencia u oposición.
FARC-EP	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo. Exguerrilla mencionada en contexto de disidencias.
Fondo de Tierras	Instrumento de la RRI para acceso a tierras (adjudicación y otras modalidades) a población priorizada.

Sigla / término	Desglose y definición
FM	Frecuencia Modulada. Banda de radio (se usa para identificar el dial de una emisora).
GINI	Índice de Gini. Medida de desigualdad (referida para comparar desigualdad territorial).
IGAC	Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Produce/gestiona información catastral; aporta a Catastro Multipropósito.
IRV	Índice de Riesgo de Victimización. Indicador de riesgo de violaciones DD.HH./infracciones DIH por municipio.
JEP	Jurisdicción Especial para la Paz. Componente judicial del SIVJNR para justicia transicional.
LGBTI	Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. Variable poblacional usada en caracterización.
MAPP/OEA	Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA. Acompaña/monitorea acciones y contextos de paz.
OACP	Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Coordina política de paz y seguimiento a compromisos.
OCAD Paz	Órgano Colegiado de Administración y Decisión – Paz. Instancia que aprueba/provee recursos de regalías para paz.
ODH-DIH	Observatorio de Derechos Humanos y DIH (Fuente/compilación de datos de DD.HH./DIH, de presidencia)
PATR	Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – Plan de Acción para la Transformación Regional. Hoja de ruta PDET.
PDET	Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Instrumento territorial priorizado del Acuerdo (municipios PDET).
PIRC	Plan Integral de Reparación Colectiva. Plan para reparar daños colectivos a sujetos de reparación colectiva.

Sigla / término	Desglose y definición
PNIS	Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Sustitución voluntaria y acompañamiento integral.
PNIS– RENHACEMOS	Línea/estrategia asociada a PNIS para proyectos y apoyo productivo (según reporte del documento).
PRB	Plan Regional de Búsqueda. Instrumento UBPD para planificar búsqueda de personas desaparecidas por región.
PRYR	Planes de Retorno y Reubicación. Medidas para retorno/reubicación de población víctima desplazada.
Protección colectiva / territorial (UNP)	Medidas para organizaciones/procesos/territorios (no solo individuos): sedes, rutas, entornos, dinámicas colectivas.
Reforma Rural Integral (RRI)	Punto 1 del Acuerdo: acceso/uso de tierra, formalización, catastro, desarrollo rural y bienes públicos.
RENHACEMOS	Estrategia asociada a sustitución/desarrollo alternativo (mencionada junto a PNIS en el documento).
RNFCIS	Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sitios de Interés Forense. Inventario para búsqueda forense.
RTVC	Radio Televisión Nacional de Colombia. Operador de medios públicos (opera emisoras de paz).
RUUVS	Registro/base usada para cruces en alertas/asistencias técnicas (mencionada como “AT con RUUVS” en el doc.).
SGR (corrientes)	Sistema General de Regalías. Fuente de financiación (recursos “corrientes”) para proyectos en territorio.
SINERGIA	Sistema de seguimiento y evaluación de políticas públicas (base de reporte/seguimiento estatal).
SIVJRNR	Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Conjunto de mecanismos (JEP, UBPD, etc.).
SRC	Sujeto de Reparación Colectiva. Comunidad/organización reconocida para reparación colectiva (base de PIRC).

Sigla / término	Desglose y definición
TOAR	Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Reparador. Medidas restaurativas/cumplimientos con enfoque reparador.
UBPD	Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Lidera búsqueda humanitaria y planes (PRB).
UARIV	Unidad para las Víctimas. Coordina atención y reparación integral, incluidos componentes colectivos.
URT	Unidad de Restitución de Tierras. Tramita/gestiona restitución a víctimas de despojo/abandono forzado.
USD	United States Dollar (dólar estadounidense). Unidad de reporte para valores de cooperación internacional.
USAID	Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Cooperación con proyectos en municipios focalizados.
ZOMAC	Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado. Priorización territorial usada para focalizar programas/inversiones.